

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/C/W/179/Add.1

23 de junio de 2000

(00-2558)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN

Respuestas de Trinidad y Tabago a las preguntas formuladas
por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
y por los Estados Unidos

Addendum

La Secretaría ha recibido de la Misión Permanente de la República de Trinidad y Tabago, mediante comunicaciones de fecha 16 de junio de 2000, las siguientes respuestas a las preguntas formuladas por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y por los Estados Unidos, que se distribuyeron en los documentos IP/C/W/178 e IP/C/W/174, respectivamente.

LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS

A. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

1. Sírvanse explicar cómo están protegidas las obras cinematográficas, los derechos exclusivos conferidos, la duración de la protección y las limitaciones y excepciones a los derechos exclusivos.

Las obras cinematográficas se protegen como obras amparadas por el derecho de autor en virtud del apartado f) del párrafo 1) del artículo 5 de la Ley de Derecho de Autor de 1997 (en adelante, "la Ley") que se aplica a las "obras audiovisuales".

Los derechos exclusivos que otorga a tales obras el párrafo 1) del artículo 8 son los siguientes:

- a) Reproducción
- b) Traducción
- c) Adaptación, arreglo u otra transformación
- d) Primera distribución al público
- e) Arrendamiento o préstamo al público
- f) Importación
- g) Exhibición pública
- h) Reproducción pública
- i) Radiodifusión
- j) Comunicación al público

Los plazos de la protección que se otorga a las obras audiovisuales en virtud del párrafo 3 del artículo 19 de la Ley son los siguientes:

- a) 75 años a partir de la fecha de la primera publicación;
- b) 75 años a partir de la fecha en que se haya puesto a disposición del público por primera vez, cuando la obra no se haya publicado antes de haber transcurrido 25 años desde su realización; o
- c) 100 años a partir de la realización de la obra, si la obra no se ha puesto nunca a disposición del público o no se ha publicado antes de haber transcurrido 25 años desde su realización.

Las excepciones a los derechos exclusivos que se otorgan a las obras audiovisuales son las siguientes:

- a) con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, se permite la reproducción privada en una única copia que lleve a cabo, con fines personales, una persona física, a menos que dicha reproducción afecte la normal explotación de la obra, o perjudique injustificadamente de otra forma los intereses legítimos del titular del derecho de autor;
- b) la importación de un máximo de tres copias de dichas obras realizada, con fines personales, por una persona física.

2. *¿Cómo justifica Trinidad y Tabago los plazos de protección correspondientes a las obras colectivas que se mencionan en el párrafo 3 del artículo 19 de la Ley de Derecho de Autor de 1997 en relación con el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, junto con el artículo 7 del Convenio de Berna?*

El párrafo 6 del artículo 7 del Convenio de Berna permite a los Estados miembros conceder plazos de protección más largos que los estipulados en los párrafos anteriores de dicho artículo.

3. *¿Cómo justifica Trinidad y Tabago los plazos de protección de las obras audiovisuales que se mencionan en el párrafo 3 del artículo 19 de la Ley de Derecho de Autor de 1997 en relación con el artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, junto con el artículo 7 del Convenio de Berna?*

El párrafo 6 del artículo 7 del Convenio de Berna permite a los Estados miembros conceder plazos de protección más largos que los estipulados en los párrafos anteriores de dicho artículo.

B. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

4. *Sírvanse indicar la definición de signo en su legislación nacional, y explicar en qué condiciones es objeto de protección.*

No hay una definición de "signo", pero la definición de "marca" es suficiente y dice lo siguiente:

"marca" en relación con:

"a) bienes, comprende una fórmula, marca, encabezamiento, etiqueta, nombre, firma, palabra, letra, número o las combinaciones de los mismos, o el envasado de los bienes o su forma, siempre que, no obstante, la marca de fábrica o de comercio no consista exclusivamente en la forma resultante de la naturaleza de los propios bienes, o que sea necesaria para obtener un resultado técnico o que confiera un valor sustancial a los bienes; y

b) servicios, comprende una fórmula, nombre, firma, palabra, letra, número o las combinaciones de los mismos".

Sin perjuicio de la acción de transmisión, la marca de fábrica o de comercio debe registrarse para que sea protegible.

Los artículos 10 y 11 de la Ley establecen las condiciones en que son susceptibles de registro las marcas de fábrica o de comercio.

En virtud del artículo 10, las marcas de fábrica o de comercio son susceptibles de registro si consisten en uno o más de los elementos siguientes:

- a) el nombre de una sociedad, individuo o empresa, representado de una manera especial o peculiar;
- b) la firma del solicitante de registro o de su predecesor en la empresa;
- c) una o más palabras inventadas;
- d) una o más palabras que no hagan referencia directa al carácter o calidad de los bienes, y que no concuerde con su significado ordinario o con una denominación geográfica o un apellido;
- e) cualquier otro signo distintivo, aunque sólo será susceptible de registro en virtud del presente párrafo la firma, la palabra o las palabras que correspondan con las descripciones de los anteriores párrafos a), b), c) y d), a menos que se demuestre su carácter distintivo.

La marca de fábrica o de comercio debe ser distintiva y, con arreglo al artículo 10, eso significa que ha de ser adecuada para los bienes respecto de los cuales la marca se registra o se propone para registro. Para determinar si una marca de fábrica o de comercio es adecuada para establecer una distinción, el Interventor podrá tener en consideración la medida en que sea intrínsecamente idónea para diferenciar, o que de hecho lo sea por razón de su uso o cualquier otra circunstancia.

Las disposiciones del artículo 11 de la Ley nacional prevén otra forma de registro basado en la capacidad de diferenciación de las marcas, en comparación con las marcas adecuadas para establecer la diferenciación del artículo 10. En dicho artículo 11, para determinar si una marca de fábrica o de comercio es capaz de diferenciar, el Interventor debe tener en consideración los dos factores que se han mencionado supra al citar el artículo 10.

5. *Sírvanse dar un ejemplo de la manera en que las definiciones de empaquetado y bulto están incorporadas al registro de marcas de fábrica o de comercio en virtud del artículo 2 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio junto con la modificación, artículo 3 a) i) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (modificación) de 1997.*

El párrafo 1) del artículo 2 de la Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio dispone que las marcas podrán consistir en el envasado de los bienes o en su forma, a condición de que la marca de fábrica o de comercio no consista exclusivamente en la forma resultante de la naturaleza de los propios bienes. Por consiguiente, las formas puramente funcionales no son susceptibles de registro.

6. *Sírvanse aclarar si la representación visual mencionada en el artículo 4 b) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio (modificación) de 1994, que sustituye al artículo 2.2) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, establece como condición de registro que los signos sean perceptibles visualmente.*

Sí, así es.

7. *Sírvanse aclarar si el uso es o no es condición de registro de una marca de fábrica o de comercio en la legislación de su país con arreglo al párrafo 3 del artículo 10 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio.*

El uso no es un requisito para el registro de la marca de fábrica o de comercio. El párrafo 1 del artículo 19 de la Ley nacional dispone que toda persona que se declare propietaria de una marca de fábrica o de comercio por ella usada o propuesta para ser usada, podrá presentar una solicitud de registro de dicha marca. No obstante, con arreglo al párrafo 3 del artículo 10 y el párrafo 2 del artículo 11, el Interventor podrá tener en consideración el uso de la marca al adoptar una decisión sobre el carácter distintivo.

C. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

8. *Sírvanse dar ejemplos de productos naturales o artesanales abarcados por la definición del párrafo 4 del artículo 2 de la Parte I de la Ley de Indicaciones Geográficas de 1996.*

Unos ejemplos serían la madera, el azúcar, las frutas, el vino, el café, el té, el tabaco, los productos textiles y los tejidos.

9. *Sírvanse mencionar la legislación de su país en la que se hace referencia a los actos de competencia desleal en el sentido del artículo 3 b) de la Parte II de la Ley de Indicaciones Geográficas de 1996.*

El párrafo b) del artículo 3 concuerda con el párrafo 2 b) del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, que permite a las partes interesadas prevenir el uso de una indicación de manera contraria a la buena práctica comercial, en el sentido del párrafo b) del artículo 10 del Convenio de París. Desde la entrada en vigor de la Ley citada no ha habido litigios.

Además, en este contexto son pertinentes las disposiciones de la Ley de Protección contra la Competencia Desleal de 1996, en particular sus artículos 5 a 9.

10. *Sírvanse dar ejemplos, si los hay, de indicaciones que se hayan juzgado contrarias a la moralidad con arreglo al artículo 5 b) de la Parte II de la Ley de Indicaciones Geográficas de 1996.*

Hasta la fecha, no se han registrado solicitudes presentadas en virtud de la citada Ley.

11. *Sírvanse explicar de qué manera se definen las expresiones "a sabiendas" y "de forma intencionada" en relación con el artículo 7 de la Parte II de la Ley de Indicaciones Geográficas de 1996, o su aplicación por la jurisprudencia.*

No existe jurisprudencia que haya determinado las definiciones de las citadas expresiones de la Ley de Indicaciones Geográficas. El artículo 7 trata de los actos delictuosos, y en el derecho penal de los países del sistema de *common law* esas expresiones se entienden con el significado de *mens rea*, que es un elemento de responsabilidad penal y remite a la idea de intencionalidad culposa.

12. *Sírvanse explicar de qué forma tienen derecho a presentar solicitudes los grupos de consumidores y las autoridades competentes (artículo 8.2) b) y c) de la Parte III).*

La Ley no distingue entre quienes tienen derecho a presentar una solicitud. Por tanto, se dará el mismo tratamiento a las solicitudes presentadas por las distintas categorías de solicitantes. La referencia a agrupaciones de consumidores y autoridades competentes deriva del hecho de que la protección de las indicaciones geográficas desempeña un papel importante para proteger los intereses y los derechos de los consumidores. Cuando los productores se abstengan de iniciar el procedimiento formal necesario, podrán hacerlo los consumidores y las autoridades competentes.

13. *Sírvanse definir el término "interesado" en relación con el artículo 10.2) b) de la Ley de Indicaciones Geográficas de 1996.*

En la Ley no se da una definición del término "interesado". Hasta el momento, no ha sido necesario interpretar la expresión "interesado". No obstante, el Interventor podría considerar que son personas interesadas las que puedan ser perjudicadas por el registro y el uso de indicaciones geográficas que no cumplan los requisitos legales. En el sistema de derecho consuetudinario y en el de código civil se ha desarrollado la noción de *locus standi* o legitimación, entendida como un derecho a demandar reparación por una cuestión determinada ante un tribunal de justicia.

14. *Sírvanse proporcionar la definición de apelación de origen con arreglo al artículo 12.1) b) de la Parte III de la Ley de Indicaciones Geográficas de 1996. Sírvanse explicar si existe o no existe diferencia con respecto a la indicación geográfica que figura en el artículo 12.1) a) de la Parte III de la Ley de Indicaciones Geográficas de 1996.*

El artículo 2 de la Ley contiene una definición de "indicación geográfica" y es conforme con el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. En vista del requisito de que una determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, la definición es más restrictiva que la definición de lo que tradicionalmente se ha conocido como "indicación de la fuente", pero más amplia que la definición de "denominación de origen".

En la citada Ley no se da una definición de "denominación de origen". En el sentido en que allí se emplea, la expresión es un error de redacción. La expresión que se utiliza en toda la Ley es "indicación geográfica". Este error permitiría interpretar que la definición de "denominación de origen" es la misma que la de "indicación geográfica". Se procederá a su corrección.

15. *Sírvanse aclarar si el procedimiento de objeción establecido en el artículo 15 de la Parte II del Reglamento de 1996 sobre indicaciones geográficas está sujeto a impugnación tras una rectificación llevada a cabo por un tribunal en virtud del artículo 12.1) b) de la Parte III de la Ley de Indicaciones Geográficas de 1996, y del artículo 17.3) de la Parte II del Reglamento de 1996 sobre indicaciones geográficas.*

Debe distinguirse entre el procedimiento de oposición (párrafo 2 del artículo 10 de la Ley) y los procedimientos de cancelación y rectificación (párrafo 1 del artículo 12 de la Ley). El procedimiento de oposición, cuando se presente, precede al registro. La cancelación (o la rectificación), cuando se solicitan, subsiguen al registro de la indicación geográfica. En virtud del artículo 12, el registro de una indicación geográfica podrá impugnarse ante los tribunales, con independencia de que se haya incoado previamente un procedimiento de oposición (y haya sido, obviamente, resuelto desfavorablemente por el Interventor).

16. *Sírvanse explicar de qué forma se utilizan en la jurisdicción de su país las excepciones previstas en el artículo 19 de la Parte IV de la Ley de Indicaciones Geográficas de 1996. Sírvanse dar ejemplos de la utilización de las excepciones por los tribunales o de listas de nombres considerados comunes con arreglo al artículo 19.3) de la Parte IV de la Ley de Indicaciones Geográficas de 1996.*

No ha habido interpretaciones, ni litigios en los que se haya invocado dicha Ley. No hay ninguna lista de denominaciones que se consideren nombre comunes.

D. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

17. *Sírvanse dar ejemplos o explicar la definición de partes de dibujos y modelos industriales que, al servir exclusivamente para obtener un resultado técnico, han sido excluidas de la protección con arreglo al párrafo 2 del artículo 3 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1996.*

El sentido del artículo 3 2) es el mismo que el que se establece en la segunda parte del párrafo 1 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC: podrá no extenderse la protección a los dibujos y modelos industriales dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

18. *Sírvanse explicar en virtud de qué legislación protege su país a los dibujos y modelos textiles, en caso de que sea distinta de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1996, y de qué manera otorga la protección.*

Los dibujos y modelos textiles se protegen con arreglo a la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1996. La definición debe entenderse en sentido amplio. Puede ser un dibujo o modelo textil todo lo que provoque una impresión estética (es decir, una impresión percibida con el sentido de la vista) en la apariencia de un producto. En esta definición se incluirían los dibujos y modelos textiles. El párrafo 7 del artículo 6 de la Ley permite el registro de los dibujos y modelos relativos a los artículos, o conjunto o composición de los mismos, de la misma clase que los de la Clasificación Internacional aplicable a los dibujos y modelos textiles y, por tanto, es compatible con el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC.

19. *Sírvanse dar ejemplos, si los hay, de dibujos y modelos industriales que, al haber sido juzgados contrarios al orden público o la moralidad, no reúnen las condiciones de registro con arreglo al párrafo 4 del artículo 4 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1996.*

Ni el Interventor ni las autoridades judiciales han tomado decisiones al respecto que puedan proporcionar un ejemplo de dibujo o modelo industrial contrario al orden público o a la moralidad y que, por tanto, no sea susceptible de registro en virtud del párrafo 4 del artículo 4 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1996.

20. *Sírvanse indicar a este respecto si existe o no alguna disposición en virtud de la cual la legislación de su país podría estipular el derecho a emitir licencias obligatorias con respecto a los diseños y dibujos industriales.*

No, no existe.

21. *Sírvanse aclarar si, aparte del pago de la tasa de renovación prescrita, existen condiciones suplementarias para prorrogar el período de protección de cinco años establecido en el párrafo 2 del artículo 10 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1996.*

No. No hay condiciones adicionales.

E. PATENTES

22. *¿Se refiere la expresión "en otras partes", que figura en el párrafo 1 del artículo 9 de la Ley de Patentes, a los actos realizados en todo el mundo?*

La expresión "en otras partes" hace referencia a los acciones realizadas en cualquier lugar fuera de Trinidad y Tabago. En ellas se incluyen las acciones de ámbito mundial.

23. *Sírvanse aclarar de qué manera es compatible el párrafo 2 del artículo 12 de la Ley de Patentes con el párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se establece que "los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones ... para evitar daños graves al medio ambiente ...".*

El párrafo 2 del artículo 12 de la Ley de Patentes tiene por finalidad el cumplimiento de las obligaciones derivadas del párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, y aunque el tenor de la Ley no sea idéntico al del párrafo citado, surte los mismos efectos.

24. *Sírvanse explicar de qué manera cumple el párrafo 1 del artículo 20 de la Ley de Patentes con lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se ruega explicar el vínculo que guarda con el artículo 70 de la Ley de Patentes.*

Con arreglo al artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, se exige a los Miembros que extiendan a todos los demás Miembros de la OMC el privilegio previsto en el artículo 21. El párrafo 1 del artículo 70 autorizaría al ministro a declarar, por delegación, que los Miembros de la OMC son parte en el Convenio a los efectos del artículo 21. La enmienda del párrafo 1 del artículo 20 tiene prelación y, por tanto, se considera idónea para dar cumplimiento a las disposiciones del citado artículo 4.

25. *Sírvanse definir la expresión "productos comerciales de primera necesidad", que figura en el párrafo 2 del artículo 41 de la Ley de Patentes.*

La expresión tiene el significado que le se da en el lenguaje ordinario. No ha habido litigios relacionados con la Ley de Patentes ni casos judiciales en que se haya interpretado este artículo.

26. *Sírvanse explicar de qué forma son compatibles los artículos 46, 47 y 48 de la Ley de Patentes con el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular, sírvanse explicar con detenimiento las disposiciones de la legislación en relación con el uso.*

La Ley de Patentes de 1996, enmendada por la Ley sobre diversas modificaciones de los derechos de propiedad intelectual, de 2000, es plenamente compatible con el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

De los artículos 46, 47 y 48 se desprende claramente que las licencias obligatorias deberán concederse después de haberse considerado individualmente (apartado a) del artículo 31).

La nueva redacción del apartado 6) del artículo 46 establece que el Tribunal debe considerar suficiente que la persona que solicita la licencia se ha esforzado por obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables, y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial (apartado b) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC). Las demás condiciones estipuladas en el apartado b) del artículo 31 se incorporan en el artículo 48 de la Ley.

La nueva redacción del párrafo 7 del artículo 46 de la Ley corresponde con la del apartado c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Los apartados a), b) y c) del párrafo 3 del artículo 46 de la Ley corresponden, respectivamente, con las condiciones que se establecen en los apartados d), e) y f) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La condición prevista en el apartado g) del artículo 31 se recoge en el apartado 4 del artículo 46 de la Ley.

Con la nueva redacción del párrafo 5 del artículo 46 de la Ley se exige que los tribunales tengan en cuenta el valor económico de la licencia. Además, el artículo 47 determina que los tribunales fijarán una remuneración razonable, habida cuenta del valor económico de la licencia. Ambas disposiciones son conformes con el apartado h) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 1 del artículo 48 de la Ley contiene una prescripción similar en lo que respecta a las licencias concedidas por razones de interés público o para rectificar prácticas contrarias a la competencia.

Las disposiciones del apartado 1) del artículo 46 y el párrafo 8) del artículo 48 de la Ley son conformes con las de los apartados i) y j) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las decisiones sobre la concesión obligatoria de licencias por razones de la insuficiente o exorbitante oferta en el mercado de Trinidad y Tabago deberán ser dictadas por los tribunales, con sujeción a procedimientos que permitan la apelación. El Ministro deberá adoptar las decisiones sobre la concesión obligatoria de licencias por razones de interés público, o sobre las infracciones de la legislación relativa a la competencia, con sujeción a revisión ante los órganos judiciales. La posibilidad de interponer recurso también es aplicable a las decisiones relacionadas con la remuneración.

Merece destacarse que la Ley de Patentes de 1996 tiene mayor alcance que el apartado k) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que estipula que el titular de la patente recibirá una compensación adecuada, teniendo en cuenta el valor económico de la explotación, aun en el caso de la concesión de una licencia para corregir prácticas contrarias a la competencia.

La Ley de Patentes de 1996 no prevé la posibilidad de explotación de licencias cruzadas en el caso de patentes dependientes (primer párrafo del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC).

Por último, la importación en Trinidad y Tabago de bienes patentados se puede alegar como una prueba de suficiente abastecimiento del mercado, ya que el párrafo 1) del artículo 46 de la Ley no exige que los bienes patentados o los bienes fabricados mediante el proceso patentado se hayan producido en el país (párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC).

27. *Sírvase explicar de qué modo el párrafo 2 del artículo 91 de la Ley de Patentes cumple con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

El párrafo 7 del artículo 70 no es de aplicación, teniendo en cuenta que la Ley de Patentes de Trinidad y Tabago, que estuvo vigente antes de la Ley de 1996, no contenía restricciones en cuanto al elemento patentable, ya fueran productos o procesos.

28. *Sírvanse presentar un ejemplar de la proclamación del Presidente en virtud de la cual se promulga la Ley de Obtenciones Vegetales.*

Ya se presentó un ejemplar.

F. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

29. *Sírvanse aclarar el alcance y las limitaciones del "interés público" aducido en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 16 de la Ley de Esquemas de Trazado (Topografías) de los Circuitos Integrados de 1996 de su país, explicando, por ejemplo, cómo se corresponde esta expresión con las condiciones expuestas en el apartado b) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

El apartado c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC estipula que "si se trata de tecnología de semiconductores" las licencias obligatorias sólo se concederán para "un uso público no comercial o utilizarse para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia tras un procedimiento judicial o administrativo". Dado que el apartado c) del artículo 31 no establece criterios para determinar la necesidad del uso público no comercial, los Miembros de la OMC tienen libertad para establecer el método adecuado para aplicar el Acuerdo en el marco de su propio ordenamiento y práctica jurídicos (párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC). El apartado a) del párrafo 1) del artículo 16 de la citada Ley hace uso de esa prerrogativa para disponer que sólo el interés público podrá constituir el fundamento del uso público no comercial. Además, esta disposición facilita ejemplos de esferas en las que se podrá invocar el interés público, como son las de la seguridad nacional, la nutrición, la sanidad o el desarrollo de otros sectores de importancia vital para la economía nacional. En este sentido, la expresión "interés público" del apartado a) del primer párrafo del artículo 16 de la Ley de Esquemas de Trazado (Topografías) de los Circuitos Integrados, de 1996, está sujeta al mismo ámbito y las mismas limitaciones que la expresión "interés público" del párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Además, es preciso señalar que el párrafo 7 del artículo 46 de la Ley de Patentes de 1996, según el texto enmendado de 1999, dice:

"En aplicación del presente artículo no se concederán licencias con respecto a una patente relacionada con la tecnología de semiconductores, excepto para un uso público no comercial o para rectificar una práctica declarada contraria a la competencia después de un procedimiento judicial o administrativo."

Por las razones expuestas, tanto el párrafo 1 del artículo 16 de la Ley de Esquemas de Trazado (Topografías) de los Circuitos Integrados, de 1996, como el párrafo 7 del artículo 46 de la Ley de Patentes, de 1996, modificada, son plenamente conformes con las disposiciones del apartado c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

30. *Sírvanse aclarar si a tenor del párrafo 4 del artículo 16 de su Ley de Esquemas de Trazado (Topografías) de los Circuitos Integrados de 1996 sólo es posible poner fin a la concesión de licencias obligatorias a petición del titular de los derechos. ¿Puede el Ministro poner fin de oficio a una licencia de esa índole si considera que ya no se dan las circunstancias que motivaron dicha licencia obligatoria?*

Sí, la supresión de una licencia obligatoria sólo es posible a petición del titular de los derechos.

No. La Ley no confiere al Ministro facultades para suprimir de oficio dicha autorización.

31. *Sírvanse aclarar con mayor precisión si la duración de la protección siempre es exactamente de 10 años (de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 7 de la Ley de Esquemas de Trazado (Topografías) de los Circuitos Integrados de 1996), incluso si ya existía explotación comercial antes de presentar la solicitud dentro del plazo establecido en el párrafo 2 del artículo 3 de la Ley de Esquemas de Trazado (Topografías) de los Circuitos Integrados de 1996.*

El plazo de la protección de los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados es de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de una solicitud de registro (artículo 7 a) de la Ley de Esquemas de Trazado (Topografías) de los Circuitos Integrados, de 1996). En principio, para que puedan registrarse se exige que dichos esquemas de trazado no se hayan explotado comercialmente (artículo 3 2) de la citada Ley). No obstante, si han sido explotados previamente, la Ley limita el periodo de explotación a dos años para que sean susceptibles de protección. Cuando se hayan explotado durante un periodo más prolongado antes de la fecha de la presentación de la solicitud, los esquemas de trazado de los circuitos integrados no podrán registrarse.

El Acuerdo sobre los ADPIC establece que, cuando los Miembros (como es Trinidad y Tabago) exijan el registro como condición para la protección de los esquemas de trazado, la protección "no finalizará antes de la expiración de un periodo de 10 años contados a partir de la fecha [...] de la primera explotación comercial en cualquier parte del mundo". El párrafo 1 del artículo 7, junto con el párrafo 2 del artículo 3 y el párrafo 2 del artículo 7 de la Ley de Esquemas de Trazado, de 1996, estipula que el plazo de la protección de un esquema de trazado previamente explotado expirará en el décimo año contado a partir de la primera explotación comercial, aun cuando el esquema de trazado se hubiera explotado durante dos años continuos. Así pues, y contestando directamente a la pregunta, la respuesta es sí, el periodo de protección se extiende exactamente a 10 años, contados a partir del primer día de la explotación. Si el titular de los derechos explota durante más tiempo el esquema de trazado antes de solicitar su registro, lo hará a expensas del plazo de la protección que, por consiguiente, no se prolongará tras el periodo mínimo de 10 años que se prescribe en el Acuerdo sobre los ADPIC.

G. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

32. *Sírvanse presentar un ejemplar de la proclamación del Presidente en virtud de la cual se promulga la Ley de Protección frente a la Competencia Desleal.*

Ya se presentó un ejemplar.

33. *Sírvanse describir la manera en que su país interpreta e incorpora las "medidas que habrán de tomarse para garantizar que los datos están protegidos del uso comercial desleal", mencionadas en el apartado b) del párrafo 4 del artículo 9 de la Ley de Patentes.*

Trinidad y Tabago reconoce sus obligaciones en las circunstancias señaladas en el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC; así esta previsto en el párrafo 5 del artículo 9 que se introdujo en la Ley de Propiedad Intelectual (con enmiendas varias), de 2000.

La citada Ley se promulgó recientemente y es inminente su notificación a la Organización Mundial del Comercio.

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

A. DERECHO DE AUTOR

1. *El artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor de 1997, de Trinidad y Tabago, establece que "[l]a presente Ley tendrá efectos aunque sea incompatible con los artículos 4 y 5 de la Constitución". Sírvanse explicar el significado de esta disposición y el mecanismo legal que permite que pueda prevalecer sobre las disposiciones de la Constitución de Trinidad y Tabago.*

La Ley de Derecho de Autor confiere al Estado el derecho de incautar la propiedad y detener a las personas. Podría pensarse que estos derechos contravienen los artículos 4 y 5 de la Constitución en la que se consagran, entre otros, los derechos individuales a la libertad y al disfrute de la propiedad. Para la aprobación de la Ley, en su redacción actual, fue necesaria una mayoría de dos tercios. Esto está previsto en el artículo 54 1) de la Constitución.

El artículo 54 1) de la Constitución dispone:

"1) Con sujeción a las disposiciones del presente artículo, el Parlamento podrá modificar cualquiera de las disposiciones de la Constitución ..."

"2) En la medida en que modifique -

a) los artículos 4 a 14 ... el Parlamento no aprobará un proyecto de ley con arreglo al presente artículo a menos que en la votación final de cada una de las Cámaras obtenga el apoyo de los votos de dos tercios, al menos, de todos los miembros de cada una de las Cámaras."

B. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

2. *¿Qué disposiciones de las leyes o reglamentos de Trinidad y Tabago regulan la protección de las marcas de fábrica o de comercio o las marcas de servicios constituidas por cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas, como establece el artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC? Sírvanse citar estas leyes y, si no se han notificado a la OMC los textos de las mismas, sírvanse notificarlas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63.*

No hay una definición de "signo", pero la definición de "marca" será suficiente.

En el capítulo 82-81 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, el artículo 2 dispone lo siguiente:

"excepto en lo relativo a la certificación, se entenderá por "marca de fábrica o de comercio" una marca utilizada o propuesta para ser utilizada en relación con los bienes, con la finalidad de indicar una conexión en el curso del comercio entre los bienes y una persona que tenga el derecho, ya sea en concepto de propietario o como usuario registrado de la marca ..."

Esto se modificó mediante el artículo 4 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1994 (enmendada), que estipula:

"marca" en relación con:

"a) bienes, comprende una fórmula, marca, encabezamiento, etiqueta, nombre, firma, palabra, letra, número o las combinaciones de los mismos;

b) servicios, comprende una fórmula, nombre, firma, palabra, letra, número o las combinaciones de los mismos".

Además, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1996 (enmendada), en su artículo 3 dispone:

"El artículo 2 de la Ley se modificó en su párrafo 2 insertando después de la frase "marca en relación con los bienes" la frase "o el envasado de los bienes o su forma, siempre que, no obstante, la marca no consista exclusivamente en la forma resultante de la naturaleza de los propios bienes, o que sea necesaria para obtener un resultado técnico o que confiera un valor sustancial a los bienes."

Las Leyes citadas se han notificado a la Organización Mundial del Comercio.

3. *Sírvanse describir detalladamente el proceso de registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicios, haciendo referencia a las prescripciones del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

El procedimiento para el registro de una marca de fábrica o de comercio o una marca de servicio es el siguiente:

1. La solicitud debe presentarse en el formato prescrito (Formulario TM N° 2 de la 2ª Lista) por la Ley (artículo 4).
2. La solicitud de registro debe contener lo siguiente:
 - a) La solicitud que se indique en la parte A del Registro.

(El Registro de las marcas de fábrica o de comercio está dividido en dos partes: "parte A" y "parte B". Todas las solicitudes deben hacerse en la parte A del Registro. La concesión o la denegación inmediata del traslado a la parte B del Registro se deja a discreción del Registrador.)
 - b) Adherir al formulario de la solicitud, en el espacio reservado para ello, una reproducción de la marca que se registra (artículo 18 1)).
 - c) La clasificación que se solicita y los respectivos bienes o servicios, según se enumeran en el Reglamento de Modificación del registro de marcas de fábrica o de comercio de 1994 (artículo 5).
 - d) La denominación y la nacionalidad de la entidad que solicita el registro de la marca.
 - e) La dirección completa de la empresa o negocio del propietario (artículo 8 1) y 2)).
3. Cuando se presenten para su registro, deben adjuntarse a la solicitud cuatro (4) reproducciones adicionales (etiquetas) de la marca (artículo 19).
4. En los casos en que se haya nombrado un procurador o agente para llenar la solicitud de registro, se debe presentar el formulario que da poder al agente (Formulario TM N° 1) para proceder en un asunto con arreglo a la Ley.

5. Los documentos que se presenten en relación con los asuntos concernientes a la Ley deberán presentarse en papel duradero, con un margen izquierdo de una y media (1 ½) pulgadas, aproximadamente, y en tamaño "A4".
6. El honorario por la presentación de la solicitud se presentará en forma de un cheque certificado o se pagará en cualquiera de las Oficinas de Recaudación de Distrito (para lo relacionado con los pertinente números de partida y subpartida, diríjanse al personal de la Oficina de la Propiedad Intelectual).

Antes de la aceptación o la denegación, la Oficina de la Propiedad Intelectual lleva a cabo un examen exhaustivo. Se podrá invitar al solicitante a que modifique las especificaciones o la marca misma. Todas las solicitudes se publican en un diario a efectos de los procedimientos de oposición. Los procedimientos de oposición se rigen por los artículos 41 a 51 del Reglamento sobre marcas.

Si la marca se registra, se inscribe en el Registro de marcas de fábrica o de comercio y marcas de servicio.

4. *¿Qué disposiciones de la legislación de Trinidad y Tabago atribuyen a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas el derecho exclusivo a impedir el uso sin autorización de signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares de otras partes cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión, según establece al artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC? Sírvanse citar estas leyes y, si los textos de las mismas no han sido notificados a la OMC, sírvanse notificarlos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63.*

En sus artículos 5 y 6, la Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio dispone lo siguiente:

"Artículo 5 1) Con sujeción a lo dispuesto en el presente artículo y en los artículos 8 y 12, el registro de una persona en la parte A del Registro, en calidad de propietario de una marca de fábrica o de comercio relativa a cualquier clase de mercancía, y no a efectos de certificación, de ser válido, conferirá o se considerará que ha conferido a dicha persona el derecho exclusivo a usar la marca en relación con dichas mercancías y, sin perjuicio de la generalidad del enunciado anterior, ese derecho se considerará conculcado por toda persona que, sin ser el propietario de la marca o un usuario registrado que tenga autorización para usarla, la utilice en el curso de operaciones comerciales para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se haya registrado la marca, o utilice una marca idéntica o tan semejante que dé lugar a probabilidad de engaño o confusión, y de manera tal que de lugar a probabilidad de que se considere que el uso de la marca:

- a) se está aplicando como el de una marca de fábrica o de comercio; o
 - b) en el caso en que el uso se lleve a cabo con las mercancías o en relación física con las mismas, o en una circular publicitaria u otras modalidades de publicidad dirigida al público, cuando conlleve una referencia a una persona que tenga el derecho en calidad de propietario o de usuario autorizado para utilizar la marca, o a los productos con los que la persona mencionada tenga relación en el curso del comercio.
- 2) El derecho a usar una marca de fábrica o de comercio que confiere el registro, tal como se ha mencionado *supra*, estará sujeto a las condiciones y limitaciones que consten en el registro, y no se considerará vulnerado por el uso de una marca como la que se ha señalado anteriormente cuando se utilice en relación con bienes destinados a la venta o comercializados de otra forma en cualquier lugar; cuando se utilice en relación con bienes que se vayan a exportar a algún mercado, o en cualquier otra circunstancia a la que, habida cuenta de las limitaciones mencionadas, no se extiendan los efectos del registro.

3) El derecho a usar una marca de fábrica o de comercio que confiere el registro, tal como se ha mencionado *supra*, no se considerará conculcado por el uso que haga una persona:

a) en relación con los bienes que, en el curso del comercio, guarden relación con el propietario o con un usuario registrado de la marca, así como los bienes o el conjunto de bienes del que formen parte, cuando el propietario o el usuario registrado hayan dado permiso para el uso de la marca y posteriormente no lo hayan retirado o anulado, o cuando hayan consentido, de manera expresa o tácita, el uso de la marca de fábrica o de comercio;

b) en relación con los bienes adaptados para formar parte, o ser accesorios, de otros bienes, en relación con los cuales se haya usado o pudiera usarse la marca de fábrica o de comercio sin conculcar el derecho conferido en la forma antes indicada, cuando el uso de la marca sea conveniente para indicar que los bienes se han adaptado y no con el propósito o el efecto de indicar que, con arreglo a los hechos, existe una relación en el curso del comercio entre una persona y los bienes;

c) en relación con los servicios a los que haya aplicado la marca de fábrica o de comercio el propietario o el usuario registrado de la marca, cuando el propósito y el efecto del uso de la marca consistan en indicar que dichos servicios han sido prestados por el propietario o el usuario registrado de la marca de fábrica o de comercio;

d) en relación con los servicios cuya prestación esté relacionada en el curso del comercio con el propietario o el usuario registrado de la marca, cuando el propietario o el usuario registrado haya expresado en algún momento, de manera expresa o implícita, que permite el uso de la marca; o

e) en relación con los servicios disponibles para ser usados junto con otros servicios en relación con los cuales se haya usado la marca de fábrica o de comercio sin vulnerar el derecho conferido por el registro, o cuando pudiera utilizarse por el momento, siempre que:

i) el uso de la marca sea razonablemente necesario para indicar que los servicios están disponibles; y

ii) cuando el uso de la marca no tenga el propósito o el efecto de indicar que, con arreglo a los hechos, existe una relación en el curso del comercio entre una persona y el suministro de esos servicios.

4) En el ejercicio del derecho de uso conferido por el registro en la forma mencionada *supra*, el uso de una marca registrada de fábrica o de comercio que sea una de las dos o más marcas registradas idénticas o muy similares, no se considerará una vulneración del derecho de uso de esas otras marcas.

Artículo 6 1) Con excepción de lo dispuesto en el párrafo 2), cuando sea válida la inscripción efectuada por una persona en la parte B del registro como propietaria de una marca de fábrica o de comercio en relación con algunos productos, conferirá o se considerará que ha conferido a dicha persona el derecho mencionado en relación con dichos bienes, al igual que la marca de fábrica o de comercio registrada en la parte B del registro, en cuanto tengan efecto en relación con una marca registrada en la parte A del registro.

2) En toda acción que se ejercite contra la vulneración del derecho de uso de una marca de fábrica o de comercio, mencionada *supra* en relación con la parte B del Registro, por actos distintos de los que se consideren infracciones en virtud del artículo 7, no se dictarán a favor del demandante interdictos judiciales u otras providencias cuando, a juicio del tribunal, el demandado demuestre que el uso que se impugna no da lugar a probabilidad de confusión o engaño ni indique una conexión en el curso de las actividades comerciales entre los bienes y una persona que tenga el derecho, ya sea por concepto de propietario o de usuario registrado, para utilizar la marca de fábrica o de comercio."

El artículo 7 de la citada Ley es igualmente instructivo.

La Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio se ha notificado al Consejo de los ADPIC.

5. *Sírvanse identificar las disposiciones de la legislación de Trinidad y Tabago que otorgan protección a las marcas notoriamente conocidas de conformidad con el artículo 6bis del Convenio de París y de los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y describir detalladamente el carácter de la protección otorgada. Si no se han notificado a la OMC los textos de las mismas, sírvanse notificarlos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63.*

La Ley (modificada) de Marcas de Fábrica y de Comercio de 1996 estipula la protección de las marcas notoriamente conocidas. El artículo 6 introduce una modificación a la Ley anterior mediante la inserción de un nuevo artículo:

"13 A 1) No se registrará una marca de fábrica o de comercio:

a) cuando sea idéntica o tan similar que induzca a confusión, o constituya una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial que en Trinidad y Tabago sea notoriamente conocida como marca de una persona distinta de la que haya solicitado el registro, y se utilice para bienes o servicios idénticos o similares; o

b) cuando sea idéntica, o tan similar que induzca a confusión, o constituya una traducción de una marca de fábrica o de comercio que ya esté registrada con respecto a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los que se solicita el registro, a condición de que el uso del comercio establezca que el uso de la marca de fábrica o de comercio relacionada con dichos bienes y servicios indique la existencia de una conexión entre esos bienes y servicios y el propietario de la marca registrada, y que dicho uso dé lugar a probabilidad de daño para los intereses del propietario de la marca registrada.

2) Para determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta la notoriedad de la marca, con inclusión de la notoriedad en Trinidad y Tabago, obtenida como consecuencia de la promoción de la marca en el sector pertinente del público que normalmente hace transacciones con los bienes o servicios pertinentes."

6. *¿Qué plazo tiene la protección que se otorga en Trinidad y Tabago a las marcas de fábrica o de comercio?*

La protección de las marcas de fábrica o de comercio se extiende a un periodo de 10 años, renovable indefinidamente en virtud del artículo 9 de la Ley (modificada) de Marcas de Fábrica y de Comercio de 1996, que sustituye el artículo 25 A de la Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio:

"25 1) Las marcas de fábrica o de comercio se registrarán por un periodo de 10 años, contados a partir de la fecha de la inscripción.

- 2) Se podrá renovar la inscripción en el registro, con arreglo a lo dispuesto en la artículo 25 A, por periodos sucesivos de 10 años."

C. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

7. *Sírvanse describir las disposiciones de la legislación de Trinidad y Tabago que otorgan protección a las indicaciones geográficas de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sírvanse citar estas leyes y, si no se han notificado a la OMC los textos de las mismas, sírvanse notificarlos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63.*

La Ley de Indicaciones Geográficas, N° 20 de 1996, establece la protección de las indicaciones geográficas de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se otorga la protección a las indicaciones geográficas, con independencia de su registro, que entran en el ámbito de aplicación de la definición de indicaciones geográficas que se contiene en el artículo 2 de la Ley. La inscripción en el registro establece la presunción de que la indicación es una indicación geográfica en el sentido del artículo 2.

La citada Ley ya se ha notificado a la Organización Mundial del Comercio.

8. *¿Qué criterios se utilizan para determinar qué protección debe darse a una indicación geográfica?*

En la definición de indicación geográfica que establece el artículo 2 de la Ley se enuncian los criterios para otorgar la protección:

Se entenderá por "indicación geográfica" una indicación que identifique un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de dicho territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea esencialmente atribuible a su origen geográfico;

son también importantes otros elementos que figuran en el artículo 6 de la Ley.

El artículo 6 dispone:

"No se protegerán como indicaciones geográficas las siguientes:

- a) las indicaciones que no concuerden con la definición del artículo 2;
- b) las indicaciones contrarias al orden público o a la moral;
- c) las indicaciones geográficas que no estén protegidas, o dejen de estar protegidas en su país de origen, o que hayan caducado por falta de uso en dicho país."

9. *Sírvanse describir cómo se ofrece a los vinos y bebidas espirituosas el nivel más alto de protección que exige el párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC y presentar ejemplos de los productos en cuestión y las disposiciones legales que los protegen. Sírvanse citar esas leyes y, si no se han notificado a la OMC los textos de las mismas, sírvanse notificarlos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63.*

El párrafo c) del artículo 3 de la Ley de Indicaciones Geográficas de 1996 estipula que:

"Respecto de las indicaciones geográficas, toda persona interesada y todo grupo interesado de productores o consumidores podrá incoar ante los tribunales los procedimientos para prevenir:

c) el uso de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas,"

en los procedimientos incoados con arreglo al artículo citado, el tribunal podrá, además de dictar un mandamiento judicial, acordar el pago de daños y perjuicios y conceder cualquier otro tipo de reparación o indemnización que considere oportuno.

Esta Ley ya se ha notificado a la Organización Mundial del Comercio.

10. *¿A qué autoridad hay que dirigirse para obtener la protección de una indicación geográfica?*

La protección derivada del registro se puede obtener de la Intervención de la Oficina de Propiedad Intelectual. La protección (prohibición del uso ilegal) se puede obtener de los Tribunales.

D. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

11. *Sírvanse describir las disposiciones de la legislación de Trinidad y Tabago que otorgan protección a los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales, según establecen los artículos 25 y 26 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sírvanse citar estas leyes y, si no se han notificado a la OMC los textos de las mismas, sírvanse notificarlos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63.*

La Ley de Dibujos y Modelos Industriales, N° 18 de 1996, establece la protección de los dibujos y modelos industriales que sean nuevos y tengan cabida en la definición de dibujos y modelos industriales del artículo 3, compatible con los artículos 25 y 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Esta Ley se ha notificado a la OMC y se ha distribuido en el documento IP/N/1/TTO/D/1.

12. *Sírvanse describir el procedimiento que ha de seguirse para obtener la protección de dibujos o modelos textiles y citar las disposiciones legales que otorgan tal protección.*

En virtud de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales, de 1996, se prescribe la protección de los dibujos textiles que entran en la definición de dibujo textil que da el artículo 3 de la Ley. El procedimiento para obtener la protección de un dibujo textil es, por tanto, el que se señala en el artículo 9 del Reglamento sobre dibujos y modelos industriales, de 1996 (documento IP/N/1/TTO/D/2).

13. *¿Qué plazo tiene la protección que otorga Trinidad y Tabago a los dibujos y modelos industriales?*

En el artículo 10 de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1996 se indica que la protección se prescribe automáticamente por un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, renovable por otros dos periodos consecutivos de cinco años, previo pago de los derechos que se prescriben.

E. PATENTES

14. *El párrafo 6 del artículo 15 de la Ley de Patentes de 1996 establece que "[l]os derechos que confieren al inventor los párrafos 1, 2, 3 y 4 no podrán ser limitados por contrato". Sírvanse explicar detalladamente el significado y alcance de esta disposición.*

El artículo 14 de la Ley de Patentes de 1996 enumera las personas que tienen derecho a obtener una patente, fundamentalmente el inventor. El párrafo 1) del artículo 15 prevé la situación en la que un empleado haga una invención en el curso de un contrato de trabajo. En este caso, o en el de un trabajo por encargo, el derecho al invento corresponderá al empleado o a la persona que encarga el trabajo, con sujeción a todo acuerdo en contrario de las partes.

El párrafo 2 prevé el caso de que el invento adquiriera un valor económico mayor que el que las partes hayan podido prever razonablemente en el momento de concertar el contrato pertinente.

En ese caso el inventor tiene derecho a una remuneración equitativa. Si las partes no llegasen a un acuerdo sobre la cantidad, los tribunales tienen facultad para fijar dicha cantidad, que puede variar según las circunstancias que concurren en cada caso.

En el párrafo 3 se aborda la situación en la que un empleado a quien no se exigen actividades de esa naturaleza en el curso de su contrato, realiza un invento en el ámbito de las actividades de su empleador utilizando datos o medios facilitados por el empleador; en este caso, y en ausencia de disposiciones en contrario, el derecho a la patente corresponderá al empleador. En tal caso, sin embargo, el empleado tendrá derecho a una compensación equitativa.

El párrafo 4 se ocupa de una situación similar, pero el campo de actividades diferente de la actividad del empleado y sin utilizar información o medios facilitados por el empleador. El derecho a la patente corresponderá al empleado.

No obstante, la finalidad del párrafo 5 es asegurar que los derechos del inventor a un trato leal y equitativo no puedan limitarse o menoscabarse por su contrato de trabajo.

15. *El artículo 46 de la Ley de Patentes de 1996 prevé la concesión de licencias obligatorias de patentes. Sírvanse explicar cómo se cumplen o respetan de otro modo las condiciones que establece el apartado c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

La Ley de Patentes de 1996, modificada por la Ley sobre diversas modificaciones de los derechos de propiedad intelectual, de 2000, es plenamente compatible con el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

De los artículos 46, 47 y 48 se desprende claramente que las licencias obligatorias se concederán después de haberse considerado individualmente (apartado a) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC).

La nueva redacción del párrafo 6 del artículo 46 establece que el tribunal debe admitir que la persona que solicita la licencia se ha esforzado por obtener una licencia del titular de la patente en términos y condiciones comerciales razonables, sin lograrlo (apartado b) del citado artículo 31). Las demás condiciones estipuladas en el apartado b) del artículo 31 están comprendidas en el artículo 48 de la Ley.

La nueva redacción del párrafo 7 del artículo 46 de la Ley corresponde a la del apartado c) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las condiciones estipuladas en los apartados d), e) y f) del artículo 31 corresponden a las de los apartados a), b) y c) del párrafo 3 del artículo 46 de la Ley, respectivamente.

La condición estipulada por el apartado g) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC se cumple en el apartado 4 del artículo 46 de la Ley.

La nueva redacción del párrafo 5 del artículo 46 de la Ley exige que el tribunal tenga en cuenta el valor económico de la licencia. Además, en el artículo 47 se determina que el tribunal concederá una compensación razonable, habida cuenta del valor económico de la licencia. Ambas disposiciones son conformes al apartado h) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 1) del artículo 48 de la Ley contiene una prescripción similar en lo que respecta a las licencias concedidas por motivos de interés público o como medida contra las prácticas restrictivas de la competencia.

Las disposiciones del párrafo 1) del artículo 46 y las del párrafo 8) del artículo 48 de la Ley corresponden a los párrafos i) y j) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los tribunales dictarán las decisiones, sujetas a procedimientos de apelación, sobre la concesión de las licencias obligatorias por razones de oferta insuficiente o inadecuada del mercado en Trinidad y Tabago. Las decisiones sobre la concesión de licencias obligatorias por razones de interés público o de infracción de la legislación sobre competencia son adoptadas por el Ministro, con sujeción a la revisión de las autoridades judiciales. La posibilidad de revisión es igualmente aplicable a las decisiones relativas a la remuneración o compensación.

Merece destacarse que la Ley de Patentes de 1996 tiene mayor alcance que el apartado k) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC ya que prescribe que el titular de la patente recibirá una compensación adecuada, habida cuenta del valor económico de la explotación, aun en el caso de una licencia concedida para poner remedio a prácticas anticompetitivas.

La Ley de Patentes de 1996 no prevé la posibilidad de explotación de licencias cruzadas en el caso de patentes dependientes (apartado 1 del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC).

Como una última característica, la importación en Trinidad y Tabago de productos patentados se podrá alegar como prueba de un suministro suficiente al mercado, ya que el párrafo 1) del artículo 46 de la Ley no exige que los bienes patentados o los productos elaborados con los procedimientos patentados sean de producción nacional (párrafo 1 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC).

16. Sírvanse identificar las disposiciones de la Ley de Patentes de 1996 que prevén la revisión judicial de las decisiones relativas a la concesión de licencias obligatorias, según establecen los apartados j) y k) del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La concesión de las licencias no voluntarias podrá ser efectuada por el Ministro que tenga la competencia en materia de patentes o por un Tribunal.

Las licencias no voluntarias que conceda el Ministro están sujetas a revisión judicial en virtud de lo dispuesto en el párrafo 8) del artículo 48 de la Ley de Patentes de 1996.

Las licencias no voluntarias que conceda un Tribunal están sujetas a la revisión del Tribunal de Apelación. Después de haber agotado el procedimiento de apelación, la última instancia corresponde al Comité Judicial del Consejo Privado. Así pues, no es preciso que la Ley de Patentes de 1996 contenga una disposición específica al respecto.

F. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

17. *Sírvanse explicar detalladamente las disposiciones de las leyes y reglamentos de Trinidad y Tabago que otorgan protección a la información no divulgada, según exige el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sírvanse citar esas leyes y, si no se han notificado a la OMC los textos de las mismas, sírvanse notificarlos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63.*

La Ley de Protección contra la Competencia Desleal, N° 27 de 1996, además de establecer la protección de la información no divulgada, compatible con el artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, también establece la protección frente a todo acto o práctica ejecutado en el curso de actividades empresariales o comerciales que sean contrarios a los usos comerciales honestos.

El artículo específico de la Ley que se ocupa de la información no divulgada es el artículo 9, que ha sido modificado recientemente por el artículo 4 de la Ley de Propiedad Intelectual (que introduce modificaciones varias), de 2000.

La Ley de Protección contra la Competencia Desleal, N° 27 de 1996, ya se ha notificado a la OMC y se ha distribuido en el documento IP/N/1/TTO/U/1.

La Ley de Propiedad Intelectual (que introduce modificaciones diversas), de 2000, ya ha sido aprobada en ambas Cámaras del Parlamento y se espera que entre en vigor en breve.

18. *Sírvanse explicar detalladamente las disposiciones de las leyes y reglamentos de Trinidad y Tabago que garantizan la protección de los datos de pruebas no divulgados que se presenten como condición para obtener autorización para comercializar productos farmacéuticos, según exige el párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sírvanse citar esas leyes y, si no se han notificado a la OMC los textos de las mismas, sírvanse notificarlos de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63.*

El artículo específico de la Ley de Protección contra la Competencia Desleal, de 1996, que regula los requisitos del párrafo 3 del artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, es el párrafo 4 del artículo 9, según la redacción dada por la Ley de Propiedad Intelectual (que introduce modificaciones diversas), de 2000.

G. OBSERVANCIA

Disposiciones Generales

19. *Sírvanse describir brevemente de qué forma cumple el Gobierno de Trinidad y Tabago las disposiciones del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidos sus párrafos 1, 2, 3 y 4. En particular, sírvanse explicar cómo establecen las leyes de Trinidad y Tabago medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual, según prevé el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Como ya se explicó en las observaciones preliminares de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia (documento IP/N/6/TTO/1), el sistema de la observancia de todos los derechos, con inclusión de los de propiedad intelectual, se aplica mediante una combinación de legislación positiva y normas consuetudinarias (*Common Law*). La legislación pertinente ya se ha notificado a la Organización Mundial del Comercio.

20. *Sírvanse identificar los tribunales que tengan la competencia jurisdiccional inicial para intervenir en los casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual y los tribunales que tengan competencia jurisdiccional para examinar en apelación las decisiones de los primeros.*

¿Está sometida la capacidad de una parte de hacer que los órganos de apelación que hayan indicado revisen las decisiones sobre el procedimiento y las resoluciones finales? (Artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC)

Como se explicó en nuestra respuesta a la primera pregunta de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia, el Tribunal Superior de Justicia de Trinidad y Tabago tiene la jurisdicción original en los casos de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Las decisiones de este Tribunal se pueden recurrir ante el Tribunal de Apelación. Ambos Tribunales constituyen el Tribunal Supremo de la Judicatura. La apelación final radica en el Comité Judicial del Consejo Privado. No se establecen limitaciones.

Procedimientos y recursos civiles y administrativos

21. Sírvanse describir los procedimientos seguidos por los tribunales y/u órganos administrativos para notificar a los demandados que se ha iniciado contra ellos un procedimiento judicial civil. Sírvanse describir también el tipo de información que se facilita con el aviso. (Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC)

Como ya se declaró en la respuesta a la pregunta 9 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia, no existen en la legislación de Trinidad y Tabago sobre derechos de propiedad intelectual disposiciones relativas a procedimientos administrativos que traten de infracciones (Sección 2 de la parte III del Acuerdo sobre los ADPIC).

Excepto en los casos excepcionales en que, por razones de urgencia, se solicite a instancia de parte la aplicación de los plazos abreviados, los procedimientos judiciales se inician con la obtención de un mandamiento de ejecución del tribunal, que se entrega en persona o por correo en la dirección de la parte demandada; en el caso de las empresas registradas en Trinidad y Tabago será la dirección de la oficina registrada que figure en el registro de sociedades.

22. ¿Tienen las partes derecho a estar representadas por un abogado independiente en las causas judiciales y administrativas civiles por infracción de los derechos de propiedad intelectual? ¿Está sometido este derecho a algún límite? Sírvanse indicar si existe alguna disposición especial referente a la comparecencia personal obligatoria de las partes. (Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC)

Véase nuestra respuesta a la pregunta 2 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

23. ¿Qué requisitos ha de cumplir una parte extranjera para iniciar un procedimiento ante los tribunales y órganos administrativos anteriormente identificados que no se exijan a los nacionales o residentes en el país?

Para iniciar un procedimiento ante los tribunales no se exige a las partes extranjeras o a los no residentes ningún requisito que no se exija a los nacionales o residentes en Trinidad y Tabago. A la parte que no sea residente en la demarcación judicial se le podrá exigir -a petición de la parte demandada y sólo después de haberse iniciado el procedimiento- que facilite alguna garantía relacionada con una posible orden futura de pago de las costas del demandado si no prospera el procedimiento de la observancia. Se impone este requisito porque en Trinidad y Tabago, por lo general, se exige que pague las costas la parte cuya pretensión se ha desestimado, y se exige una garantía por la dificultad que conlleva ejecutar una orden de pago de las costas frente a una parte que reside fuera de la jurisdicción del tribunal que lo dicta. El fundamento jurídico pertinente se encuentra en el Reglamento del Tribunal Supremo.

24. *Sírvanse describir los límites que se impongan a la capacidad de las partes para sustanciar sus alegaciones o presentar todas las pruebas pertinentes en las causas judiciales y administrativas civiles por infracción de derechos de propiedad intelectual. (Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

No existen limitaciones.

25. *Sírvanse describir los mecanismos que se utilizan para identificar y proteger la información confidencial en las causas judiciales y administrativas civiles por infracción de derechos de propiedad intelectual. (Párrafo 1 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 4 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

26. *¿Qué disposiciones garantizan que las causas por infracción de derechos de propiedad intelectual son tramitadas con diligencia y qué disposiciones permiten impedir que una parte provoque deliberadamente un retraso en un procedimiento? ¿Bajo qué circunstancias se aplican estas disposiciones?*

Véase nuestra respuesta a las preguntas 5 y 12 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

27. *Sírvanse describir cómo y bajo qué circunstancias los funcionarios judiciales y administrativos podrán ordenar a las partes que presenten las pruebas pertinentes en una causa judicial o administrativa civil por infracción de derechos de propiedad intelectual. ¿Qué tipo de pruebas o de información podrá exigirse que se presente antes del juicio y cuánto tiempo dura en general este período anterior al juicio durante el que puede exigirse la presentación de pruebas o información? (Párrafo 2 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véanse las respuestas a las preguntas 3 y 8 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

28. *Sírvanse describir las medidas que pueden adoptar los funcionarios judiciales y administrativos cuando una parte no presente la información necesaria. Sírvanse describir las circunstancias en que normalmente se recurre a estas medidas en los procedimientos judiciales y administrativos civiles para lograr la observancia de derechos de propiedad intelectual. (Párrafo 2 del artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 3 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

29. *¿Están facultados los jueces y funcionarios administrativos para dictar mandamientos (o medidas equivalentes) de que una parte desista de una infracción y para impedir que los productos importados que infrinjan derechos de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales? Sírvanse describir detalladamente el procedimiento que se sigue para dictar tales mandamientos. (Párrafo 1 del artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 5 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

30. *¿Cuánto tiempo se necesita por lo general, en la práctica, para obtener un mandamiento (o medida equivalente) desde que se presenta la solicitud hasta su concesión? ¿Qué pruebas han de presentarse normalmente para establecer el derecho de una parte a cada uno de los tipos de recursos que se hayan identificado y qué condiciones se imponen para poder utilizar tales recursos? (Artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véanse nuestras respuestas a las preguntas 8 y 11 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

31. *El párrafo 2 del artículo 44 constituye una excepción a las disposiciones del párrafo 1 cuando se trate de la utilización por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, en cuyo caso se limitan los recursos contra la infracción al pago de una compensación adecuada de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31. ¿Establecen las leyes de Trinidad y Tabago límites de este tipo a los recursos disponibles?*

No existen tales limitaciones. Los mandatos pueden dictarse contra la Administración, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

32. *Sírvanse explicar si los funcionarios judiciales y administrativos están facultados para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño causado por la infracción y los gastos del titular del derecho, incluidos los honorarios de los abogados. ¿Qué factores se consideran para establecer la cuantía de los daños? (Artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 5 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia, con referencia específica al apartado con el título "Órdenes de resarcimiento de daños y perjuicios, con inclusión de la reparación por concepto de beneficios y los gastos, comprendidos los honorarios de los abogados".

33. *Sírvanse describir las medidas correctivas adicionales (por ejemplo, destrucción de las mercancías y de los materiales e instrumentos que se hayan utilizado para la producción de los bienes infractores) que los funcionarios judiciales y administrativos podrán adoptar en los casos judiciales y administrativos civiles por infracción de derechos de propiedad intelectual, y las circunstancias en que se podrá recurrir a tales medidas correctivas. ¿Qué factores se consideran para determinar qué tipo de recurso se utilizará? (Artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 5 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia, con referencia específica al apartado "Destrucción o eliminación por cualquier otro medio de los circuitos comerciales de las mercancías infractoras y de los materiales e instrumentos utilizados para su producción", y nuestra respuesta a la pregunta 24 de dicha Lista.

34. *¿Están facultados los funcionarios judiciales y administrativos para ordenar a los infractores que informen al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución? ¿Bajo qué circunstancias se ejerce tal facultad? (Artículo 47 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 6 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

35. *Sírvanse explicar si las autoridades públicas y los funcionarios están exentos de responsabilidad por el abuso del procedimiento de observancia y describir las circunstancias en que no se aplica esta exención. (Artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 7 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia. La inmunidad otorgada en virtud del artículo 85 de la Ley de Patentes.

Medidas provisionales

36. *Sírvanse identificar las medidas provisionales que pueden adoptarse de conformidad con las leyes de Trinidad y Tabago para evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. (Artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 10 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

37. *Sírvanse describir brevemente:*

- a) *Los requisitos que han de cumplirse para establecer el "daño irreparable" al titular del derecho. (Párrafo 2 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC)*
- b) *Los factores que considerarán las autoridades judiciales y administrativas para determinar si existe "un riesgo demostrable de destrucción de pruebas". (Párrafo 2 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC)*
- a) Como hemos manifestado en la respuesta a la pregunta 11 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia, las medidas de amparo provisionales se concederán cuando el tribunal estime que es necesario un mandamiento porque, de no dictarse el mismo, la causa del demandante resultaría perjudicada, y que es justo y conveniente tanto para los intereses del demandante como los del demandado. Como es natural, lo que sea justo y conveniente dependerá de las circunstancias de cada caso concreto y los tribunales lo decidirán con arreglo al mérito del asunto de que se trate.
- b) Como se ha indicado *supra*, cuando exista el riesgo de destrucción de pruebas el tribunal lo tendrá en consideración para determinar la concesión de una medida de amparo provisional. Lo que sea justo y conveniente dependerá, naturalmente, de las circunstancias del caso concreto y los tribunales lo decidirán con arreglo al mérito del asunto de que se trate.

38. *Sírvanse describir el tipo de pruebas que se exigen a los titulares de todo tipo de derechos de propiedad intelectual que estén incluidos en el ámbito del Acuerdo sobre los ADPIC para establecer la titularidad de la propiedad intelectual en cuestión y que su derecho ha sido infringido. (Párrafo 3 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

En ausencia de toda impugnación, o cuando el demandado no lo niegue, el tribunal presumirá que un solicitante de amparo es el verdadero titular del derecho. Por consiguiente, sólo se exigen pruebas cuando el demandado pone en duda o niega que el titular del derecho está legitimado para entablar un procedimiento en su contra.

En el caso de un derecho de propiedad intelectual que esté registrado (una patente, marca registrada o dibujo o modelo registrado), una entidad (ya sea propietaria o licenciataria exclusiva) sólo tendrá capacidad para instar procedimientos de observancia en lo que respecta a ese derecho si sus intereses de propietario se encuentran inscritos en el registro adecuado que se mantiene en la Oficina de la Propiedad Intelectual.

En el caso del derecho de autor y algunos de los derechos conexos, hay diversas presunciones legales relativas a la propiedad de estos derechos. Con sujeción a la oposición de la parte demandada, los tribunales presumen que el demandante que ejerza un derecho de autor es el propietario del derecho ejercitado.

39. *¿Están obligados los titulares de un derecho a aportar una fianza o garantía equivalente para proteger al demandado y evitar abusos? ¿Cómo se determina la cuantía? (Párrafo 3 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 7 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia, con referencia concreta al apartado sobre las "disposiciones relativas a la indemnización a los demandados a los que se haya impuesto indebidamente una obligación". La cuantía varía según las circunstancias de cada caso.

40. *Sírvanse describir brevemente lo siguiente:*

- a) *El fundamento jurídico que los funcionarios judiciales y administrativos tengan para adoptar medidas provisionales sin haber oído a la otra parte y las medidas que podrán adoptarse inaudita altera parte. (Párrafo 4 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC)*
- b) *¿Exige el ejercicio de las facultades antes mencionadas una orden judicial? (Párrafo 4 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véanse nuestras respuestas a las preguntas 10 y 11 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia. Como se indicó anteriormente, en los procedimientos sobre la observancia no hay medidas provisionales de naturaleza administrativa (Sección 3 de la parte III del Acuerdo sobre los ADPIC) y, por consiguiente, el apartado b) de la pregunta 40 no es de aplicación.

41. *¿Cuánto tiempo transcurre en general entre la solicitud de cada una de las medidas antes indicadas y su aprobación?*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 13 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

42. *Sírvanse describir el procedimiento de notificación a las partes afectadas de la ejecución de las medidas provisionales y el inicio de una revisión. (Párrafo 4 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 12 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

43. *Sírvanse describir el tipo de información que se exige a los demandantes para identificar las mercancías que están sometidas a medidas provisionales. (Párrafo 5 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véanse nuestras respuestas a las preguntas 10 y 11 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

44. *Sírvanse describir el carácter de las pruebas exigidas a los demandantes para que se concedan las medidas provisionales, haciendo referencia a cada uno de los tipos de propiedad intelectual protegidos por el Acuerdo sobre los ADPIC. (Artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véanse nuestras respuestas a las preguntas 10 y 11 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

45. *Sírvanse describir el procedimiento para revocar o dejar sin efecto de otro modo unas medidas provisionales derivadas de actuaciones judiciales y administrativas de observancia de las normas si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable. ¿Qué se entiende por un "plazo razonable" para iniciar el procedimiento? (Párrafo 6 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 12 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

Lo que constituye un "plazo razonable" depende de las circunstancias de cada caso.

46. *Sírvanse indicar si los funcionarios judiciales y administrativos están facultados para ordenar que el demandado sea indemnizado por cualquier daño que sufra a consecuencia de la revocación o caducidad de las medidas provisionales. (Párrafo 7 del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 5 (en particular, el apartado titulado "Mandamientos judiciales") de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

47. *Sírvanse identificar qué autoridad está facultada en Trinidad y Tabago para aceptar las solicitudes de suspensión del despacho de aduana de las supuestas mercancías infractoras. (Artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

En Trinidad y Tabago, la autoridad judicial competente es el Tribunal Supremo, y la autoridad competente para adoptar medidas en frontera es el Controlador de Aduanas e Impuestos Especiales.

48. *Sírvanse describir el procedimiento de protección de la propiedad intelectual en la frontera (por ejemplo, solicitud, información exigida, procedimiento y plazos para notificar al demandante la aceptación, período efectivo de las medidas de protección en la frontera). (Artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véanse nuestras respuestas a las preguntas 15 y 16 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

49. *Sírvanse describir, en su caso, qué procedimiento ha de seguirse para impedir la exportación de mercancías infractoras y en tránsito.*

Aparte de los procedimientos establecidos por la Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio, no hay procedimientos para interrumpir la exportación de las mercancías infractoras y las mercancías en tránsito.

En su artículo 71 H) la Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio dispone:

"Cuando:

- a) el Estado confisque las mercancías en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 D);
- b) el tribunal ordene, en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 F), que Estado confisque las mercancías,

las mercancías deben destruirse o disponerse de ellas en la forma que determine el Controlador de Aduanas e Impuestos Especiales; excepto en los casos de mercancías falsificadas, el Controlador únicamente permitirá la reexportación de dichas mercancías en un estado inalterado cuando concurren circunstancias excepcionales."

50. *Sírvanse explicar qué pruebas permiten establecer la presunción de una infracción a los efectos del artículo 52 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Dependerá de las circunstancias de cada caso.

51. *Sírvanse verificar que las autoridades que se hayan identificado anteriormente como competentes están facultadas para exigir fianzas o garantías equivalentes. (Artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

En virtud de lo dispuesto en el artículo 71 b) 3) de la Ley de Marcas de Fábrica y de Comercio, el Controlador de Aduanas e Impuestos Especiales podrá, ocasionalmente, exigir al demandante notificado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 71 A A, que le presente una fianza en el plazo y en la forma que le haya especificado, ya sea mediante garantía, depósito de una suma de

dinero u otro modo, que cubra todas las acciones, procedimientos, reclamaciones y demandas que se puedan presentar, o los gastos y costas en que pueda incurrir el Controlador como consecuencia de la incautación de las mercancías a las que se refiera la notificación.

En el artículo 8 del Reglamento sobre derecho de autor (aduanas) de 2000, se establece una disposición similar.

Ya se ha notificado a la Organización Mundial del Comercio toda la legislación pertinente.

52. *Sírvanse identificar las formas de propiedad intelectual, en su caso, que están sometidas a las disposiciones del párrafo 2 del artículo 53 del Acuerdo sobre los ADPIC.*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 16 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

53. *¿Qué procedimiento ha de seguirse para notificar a los demandantes la suspensión del despacho de aduana? (Artículo 54 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 16 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

54. *Sírvanse identificar los foros en que el demandante o una parte podrán iniciar un procedimiento sobre el fondo de la cuestión para que las autoridades aduaneras puedan prolongar la suspensión del despacho de las mercancías por un plazo superior a 10 días hábiles. (Artículo 55 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

El foro pertinente es el Tribunal Supremo de la Judicatura. Véanse nuestras respuestas al segundo apartado de la pregunta 17 y a la pregunta 1 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia

55. *¿Están facultados los funcionarios judiciales y administrativos para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55? (Artículo 56 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 16 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

56. *Sírvanse explicar el procedimiento establecido para dar al titular del derecho la oportunidad de inspeccionar mercancías sospechosas que hayan sido retenidas por las autoridades aduaneras. (Artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 16 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

57. *Sírvanse explicar si las autoridades competentes están facultadas en Trinidad y Tabago para actuar de oficio y, en caso positivo, qué medidas de observancia pueden adoptar. (Artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 18 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

58. *Sírvanse describir los recursos que podrán utilizarse contra las mercancías infractoras (a saber, destrucción, apartamiento de los circuitos comerciales o ambas cosas). (Artículo 59 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véanse nuestras respuestas a las preguntas 5 y 19 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

59. *Sírvanse aclarar si las importaciones insignificantes están excluidas por la legislación de Trinidad y Tabago de medidas en frontera. En caso positivo, ¿qué se entiende por una importación "insignificante"? (Artículo 60 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véase nuestra respuesta a la pregunta 15 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

Procedimientos penales

60. *Sírvanse explicar detalladamente qué medidas se están adoptando para garantizar que no se producirán retrasos innecesarios en la tramitación de demandas penales presentadas por partes interesadas, en la publicación de mandamientos judiciales una vez que se han presentado a los jueces las solicitudes de las mismas y en general garantizar la observancia de las leyes penales. Además, sírvanse explicar si las autoridades encargadas de la observancia de las normas están adoptando alguna medida para establecer plazos o directrices para ciertas etapas del proceso de investigación penal.*

La Oficina del Fiscal General ha establecido un grupo de asesores jurídicos que están en contacto permanente con la Policía cuando se requieran criterios o asesoramiento sobre asuntos relacionados con la propiedad intelectual.

Al recibir una denuncia, la policía, en consulta con un asesor jurídico de la Oficina del Fiscal, inicia las investigaciones sobre la validez de la documentación y demás pruebas presentadas. Los cargos se presentan a condición de que haya un adecuado fundamento probatorio.

El dictado de las órdenes judiciales no es una causa de demora. Los funcionarios de la Policía con rango no inferior al de Inspector no necesitan mandamientos judiciales para llevar a cabo sus inspecciones en instalaciones, a condición de que el funcionario tenga "una sospecha razonable" de que en dichas instalaciones se están realizando copias ilegales del material de que se trate. Los funcionarios con rango inferior al de Inspector deben obtener un mandamiento judicial antes de entrar a inspeccionar las instalaciones, pero los mandamientos judiciales mencionados se obtienen rápidamente.

El Gobierno de Trinidad y Tabago ha iniciado una campaña educativa para que el público cobre conciencia de sus responsabilidades ante la ley. La campaña educativa continua está resultando útil para ayudar a la Policía y las autoridades de Aduanas a comprender sus facultades para practicar arrestos e incautaciones. Como parte de la "Semana del Derecho de Autor" de este país, se celebró recientemente una sesión a puerta cerrada para los magistrados que se ocupan de la observancia y las infracciones del derecho de autor. El Gobierno también ha tomado la iniciativa de invitar a jueces extranjeros, versados en materia de propiedad intelectual, a sostener debates con las autoridades judiciales nacionales.

61. *Sírvanse explicar si en los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería del derecho de autor los recursos disponibles comprenden la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados, y en qué circunstancias, y describir las condiciones que han de cumplirse para que se impongan tales sanciones. (Artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC)*

Véanse nuestras respuestas a las preguntas 5 y 21 de la Lista de Cuestiones sobre la Observancia.

62. *Sírvanse presentar información estadística sobre las medidas civiles adoptadas para mantener la observancia del derecho de autor, las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazado (topografías)*

de los circuitos integrados y el secreto comercial en los años 1998 y 1999, con inclusión del número de procedimientos iniciados; mandamientos judiciales emitidos; los productos infractores confiscados; el equipo infractor confiscado; los casos resueltos (con inclusión de posibles acuerdos); y la cuantía de las compensaciones por daños causados que se hayan concedido.

En Trinidad y Tabago los derechos de propiedad intelectual son de naturaleza privada y, por tanto, la acción para instar su observancia incumbe al titular de los mismos. Normalmente, la Administración no interviene en los litigios civiles relacionados con la propiedad intelectual y, por consiguiente, no recopila datos globales sobre dichos litigios.

Se pueden recabar datos parciales en el Tribunal Supremo.

Se podrían obtener los datos solicitados si correspondiesen al periodo que se inició el 1º de enero de 2000.

63. *Sírvanse presentar información estadística sobre las medidas penales para proteger la observancia de las leyes que se hayan adoptado con respecto a la piratería del derecho de autor y las infracciones de las marcas de fábrica o de comercio en los años 1998 y 1999, con inclusión del número de actuaciones policiales, denuncias, procesamientos y cuantía de las multas y/o penas de prisión (con inclusión de información acerca de si se pagaron las multas y se cumplieron realmente las penas de prisión o éstas fueron suspendidas) y cualquier otra información que demuestre que el sistema penal actúa con eficacia como disuasor de la piratería del derecho de autor y la falsificación de marcas de fábrica o de comercio.*

Generalmente, la Administración de Trinidad y Tabago no recopila información en la forma solicitada. Podría haber algunos datos disponibles en el Tribunal Supremo. Se podrían obtener los datos solicitados si correspondiesen al periodo que se inició el 1º de enero de 2000.

64. *Sírvanse describir las iniciativas que se hayan planificado para mejorar la observancia de los derechos de propiedad intelectual en Trinidad y Tabago, en particular las iniciativas con respecto a medidas de carácter penal.*

El Gobierno de Trinidad y Tabago está examinando la posibilidad de establecer una Dependencia de Observancia y un Tribunal de Derechos de Autor. También está examinando la posibilidad de crear un tribunal específico que se ocupe de los asuntos de propiedad intelectual. La campaña educativa continua está resultando útil para ayudar a la Policía y a las autoridades de Aduanas a comprender sus facultades para practicar arrestos e incautaciones. El Gobierno también ha tomado la iniciativa de invitar a jueces extranjeros versados en materia de propiedad intelectual a sostener debates con las autoridades judiciales nacionales.
